



# Asamblea General

Distr. general  
28 de julio de 2022  
Español  
Original: inglés

---

## Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 69 b) del programa provisional\*

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros  
medios de mejorar el goce efectivo de los derechos  
humanos y las libertades fundamentales**

## **Las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos**

### **Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, de conformidad con la resolución [45/17](#) del Consejo de Derechos Humanos.

---

\* [A/77/150](#).



## **Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana**

### **La repercusión de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de los pueblos indígenas**

#### *Resumen*

En el presente informe, el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, examina las implicaciones negativas actuales de las sustancias tóxicas y peligrosas en el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La minería, la exploración y extracción de petróleo y gas, la utilización de plaguicidas tóxicos, el vertido de desechos peligrosos y las actividades militares tienen efectos terribles en los derechos de los pueblos indígenas. Todos los aspectos de la vida de esos pueblos se ven afectados por la contaminación de su cuerpo y sus tierras, aguas, alimentos, fauna y flora silvestres y plantas. El Relator Especial presenta una serie de recomendaciones para hacer frente a las consecuencias adversas de las sustancias tóxicas en los pueblos indígenas, incluidas recomendaciones sobre cómo se deberían interpretar los instrumentos jurídicos relativos a las sustancias y desechos químicos a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

## I. Introducción

1. Los pueblos indígenas se enfrentan a una grave amenaza para su salud, sus tierras y sus territorios como consecuencia de la exposición a sustancias y desechos peligrosos. Los pueblos indígenas tienen una íntima conexión con el medio ambiente en el que habitan, por lo que sufren de manera desproporcionada los daños del menoscabo de sus territorios debido, entre otras cosas, a la expansión industrial, los agronegocios, las industrias extractivas y el vertido de desechos. El racismo estructural silencia las voces de los pueblos indígenas y agrava la carga desproporcionada de la contaminación tóxica.

2. La exposición a sustancias tóxicas<sup>1</sup> es una forma de violencia ambiental contra los pueblos indígenas, y son varios los factores que la impulsan y la perpetúan. El colonialismo ha impuesto actividades centradas en los beneficios que, de manera flagrante, hacen caso omiso de la salud y el bienestar de los pueblos indígenas y sus tierras. La expansión de la economía mundial da prioridad a la riqueza para unos pocos a expensas de los derechos de los pueblos indígenas. Las industrias extractivas en los territorios indígenas con frecuencia pasan por alto los costos económicos y de otro tipo que tienen la contaminación ambiental y el uso no mercantilista de los recursos naturales.

3. El acceso de los pueblos indígenas a la justicia en relación con los efectos adversos de las sustancias tóxicas en sus tierras y su salud es escaso y, con frecuencia, ilusorio. Unos recursos financieros mínimos, la discriminación del Estado y la corrupción y la falta de leyes de protección cimientan la continua marginación de los pueblos indígenas.

4. En algunos casos, la exposición a sustancias tóxicas conduce al traslado forzoso de los pueblos indígenas, lo cual pone en peligro sus medios de vida y sus prácticas culturales y espirituales. La grave contaminación tóxica da lugar a la proliferación de zonas consideradas de sacrificio que amenazan la existencia misma de los pueblos indígenas como pueblos distintos. Los pueblos indígenas también sufren presión psicológica y espiritual al tener que trasladarse de manera forzosa debido a que las sustancias tóxicas están dejando sus tierras y territorios inhabitables.

5. Los pueblos indígenas que sufren como consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas tienen un acceso limitado a los servicios de atención primaria de la salud. Las prácticas de salud tradicionales no pueden hacer frente a los problemas de salud nuevos y desconocidos que surgen de la exposición a sustancias tóxicas. Las autoridades públicas y las empresas con frecuencia atribuyen las disparidades en materia de salud entre los pueblos indígenas a la negligencia o a sus prácticas culturales.

6. El contundente y desproporcionado efecto que tienen las sustancias tóxicas sobre los pueblos indígenas vulnera los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, incluidos, entre otros, los derechos a la cultura, la tierra y los recursos naturales, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, el agua, a un medio ambiente saludable, y a la vida, la salud y la integridad personal. Esas vulneraciones son generalizadas y sistemáticas y deben cesar de inmediato.

7. En el marco del mandato relacionado con las sustancias tóxicas y los derechos humanos, se han preparado unas directrices<sup>2</sup> pensadas para ayudar a los Estados, las empresas, la sociedad civil y otros agentes a “determinar y abordar los problemas

<sup>1</sup> Para facilitar la consulta, el Relator Especial se refiere a sustancias y desechos peligrosos como “sustancias tóxicas”, por lo que el término “sustancias tóxicas”, según se emplea en el texto, incluye también las sustancias y desechos peligrosos, aunque no tóxicos.

<sup>2</sup> Véase [A/HRC/36/41](#).

fundamentales que dan lugar a abusos contra los derechos humanos debidos a las sustancias tóxicas”. En las directrices se reconoce que los pueblos indígenas “siguen sufriendo graves abusos contra los derechos en relación con la contaminación de sus tierras y territorios debido a la polución causada por las industrias extractivas, las sustancias químicas tóxicas que se trasladan a gran distancia por el viento y el agua, y el vertimiento o lixiviación de desechos peligrosos”.

8. En su resolución 45/17, el Consejo de Derechos Humanos decidió ampliar el mandato del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos y solicitó al Relator Especial que siguiera proporcionando información detallada y actualizada sobre las consecuencias adversas de la exposición a sustancias tóxicas de las personas y grupos en situaciones vulnerables, específicamente los pueblos indígenas.

9. El presente informe se basó en un amplio proceso de consulta en el que el Relator Especial invitó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y los círculos académicos a aportar sus puntos de vista. El Relator Especial distribuyó ampliamente un cuestionario, al que recibió numerosas respuestas muy valiosas<sup>3</sup>. El Relator Especial coorganizó consultas en línea con los pueblos indígenas del 17 al 19 de mayo de 2022<sup>4</sup>, coorganizó un evento paralelo durante el 21<sup>er</sup> período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en Nueva York el 26 de abril y formuló una declaración ante el Foro Permanente el 27 de abril.

10. El Relator Especial expresa su agradecimiento a quienes han compartido sus conocimientos, ideas y perspectivas tanto en comunicaciones escritas como en reuniones en línea. Esas valiosas ideas se han incorporado en las conclusiones del informe.

## II. Actividades que imponen efectos tóxicos sobre los pueblos indígenas

11. La conquista y la colonización de los territorios indígenas condujo directamente a actividades que contaminan y tienen efectos adversos en todos los aspectos de la vida de los pueblos indígenas<sup>5</sup>. Hoy en día, los nuevos colonizadores son las empresas mineras, las compañías de petróleo y gas y los agronegocios, con frecuencia con la complicidad —abierta o callada— de los Estados.

12. La llegada de trabajadores y colonos expone a los pueblos indígenas a virus y enfermedades desconocidas en sus comunidades, para las que su sistema inmunológico no tiene defensas<sup>6</sup>. El resultado de esta exposición pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas, en particular de aquellos que viven aislados.

<sup>3</sup> Las respuestas recibidas por el Relator Especial pueden consultarse en la dirección <https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-input-impact-toxics-indigenous-peoples>.

<sup>4</sup> Con el Consejo Internacional de Tratados Indios.

<sup>5</sup> Véase A/70/301.

<sup>6</sup> Aportación de Cultural Survival.

## A. Minería

13. La minería libera más de 180 millones de toneladas de desechos peligrosos cada año a los ríos, los lagos y los océanos de todo el mundo, lo cual afecta a fuentes de agua vitales para los seres humanos y la vida silvestre. Los pueblos indígenas se ven desproporcionadamente afectados por las actividades extractivas debido a que sus tierras y territorios contienen valiosos depósitos de minerales. Aproximadamente el 70 % de la producción de cobre y uranio se lleva a cabo en tierras y territorios de los pueblos indígenas, donde se encuentran también entre el 50 % y el 80 % de los recursos minerales que buscan las empresas mineras<sup>7</sup>. Los esfuerzos por acelerar la descarbonización de las economías nacionales están aumentando la presión para la extracción de tierras raras, litio, zinc y cobalto, entre otros.

### 1. Minería en gran escala

14. La minería en gran escala libera enormes cantidades de sustancias tóxicas al aire, el suelo y el agua en las tierras y los territorios indígenas. La contaminación viene de la gestión de los proyectos y del vertido final de desechos sólidos y líquidos, el uso y la liberación de sustancias químicas durante el procesamiento de los minerales, y de las emisiones<sup>8</sup>. La minería en gran escala requiere una cantidad sustancial de agua y produce grandes cantidades de desechos, que contienen sustancias peligrosas como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, cromo, cianuro y otros contaminantes que son neurotóxicos y cancerígenos.

15. Las explotaciones a cielo abierto, los relaves mineros y los depósitos de desechos son algunas de las mayores fuentes de contaminantes tóxicos que afectan a la calidad del suelo, el aire y el agua necesarios para la subsistencia de los pueblos indígenas. El sulfuro en los yacimientos minerales puede generar avenamiento ácido de las minas, que lixivia sustancias tóxicas de estas y afecta seriamente a la calidad del agua. El avenamiento ácido daña el suelo, el aire, el agua y la tierra de los pueblos indígenas de todo el mundo, desde las zonas de minería de carbón en Assam, en el norte de la India, hasta las zonas de extracción de roca dura en la reserva de Fort Belknap, en los Estados Unidos de América<sup>9</sup>.

16. Con frecuencia, la actividad minera produce polvo, que ensucia el aire y daña los pulmones de los pueblos indígenas que viven en zonas cercanas. La exposición prolongada a partículas de polvo que contienen carbón, sílice y otros polvos finos puede derivar en enfermedades pulmonares y respiratorias crónicas<sup>10</sup>. En 2020, el Relator Especial expresó seria preocupación por la mina de Cerrejón en La Guajira (Colombia), que estaba teniendo graves efectos sobre la salud del pueblo wayúu<sup>11</sup>.

17. En muchos lugares, siguen sin gestionarse los relaves mineros. En Australia, el pueblo banjima sufre la contaminación de tres millones de toneladas de relaves no contenidos de minas de amianto cerradas<sup>12</sup>. En varias regiones, se permite a las empresas mineras verter los residuos de la actividad minera en el mar, y esos residuos

<sup>7</sup> Abigail Anongos *et al*, *Pitfalls and Pipelines: Indigenous Peoples and Extractive Industries* (Fundación Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación en las Políticas y la Educación Tebtebba, 2012).

<sup>8</sup> Oluranti Agboola *et al*, "A review on the impact of mining operation: monitoring, assessment and management", *Results in Engineering*, vol. 8, diciembre de 2020.

<sup>9</sup> Aportaciones de los pueblos indígenas de Mung-Dun-Sun-Kham, en Assam, en el nordeste de la India, y de la comunidad india de Fort Belknap.

<sup>10</sup> AL PHL 1/2019.

<sup>11</sup> AL COL 7/2020.

<sup>12</sup> Aportación de la Banjima Native Title Aboriginal Corporation.

pueden contaminar con metales pesados las poblaciones de peces de las que depende la pesca de los pueblos indígenas<sup>13</sup>.

## 2. Extracción de oro en pequeña escala

18. La extracción de oro artesanal y en pequeña escala es la mayor fuente de contaminación por mercurio, una contaminación que tiene efectos tanto inmediatos como a largo plazo sobre la salud humana y el medio ambiente<sup>14</sup>. Se estima que entre 10 millones y 15 millones de personas participaban activamente en esa actividad en 2017, incluidos aproximadamente 1 millón de niños y 4,5 millones de mujeres<sup>15</sup>. El mercurio que libera a la tierra y el agua la extracción de oro artesanal y en pequeña escala supera las 2.000 toneladas anuales, y las emisiones a la atmósfera representan el 37 % (838 toneladas anuales) de las emisiones de mercurio a nivel mundial<sup>16</sup>. El mercurio puede dañar los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como los pulmones, los riñones, la piel y los ojos.

19. La extracción de oro en pequeña escala se lleva a cabo con frecuencia sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y sin permisos del Gobierno. En la Amazonia se estima que hay 4.472 puntos de extracción repartidos por 20 ríos, a lo que hay que sumar un aumento de las importaciones de mercurio<sup>17</sup>. El Estado Plurinacional de Bolivia se está convirtiendo en un centro regional para el tráfico ilícito de mercurio en la región amazónica y de la contaminación por mercurio que afecta a los pueblos indígenas<sup>18</sup>.

20. Los efectos de la contaminación por mercurio son generalizados e intergeneracionales. En lugares como Guyana, la extracción de oro lleva envenenando a pueblos indígenas desde la década de 1990<sup>19</sup>. En el Brasil, el 90 % de la población yanomami tiene niveles de mercurio altamente peligrosos en su cuerpo, con serios efectos en su salud<sup>20</sup>. En la Amazonia peruana, más de 180 toneladas de mercurio terminan en los ríos cada año; ello ha llevado al Gobierno a declarar una emergencia en la región de Madre de Dios<sup>21</sup>. En ocasiones, los pueblos indígenas participan en la extracción de oro en pequeña escala, sin información ni conciencia sobre sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

## 3. Contaminación radiactiva: extracción de uranio

21. Aproximadamente el 70 % del uranio que se extrae en todo el mundo para alimentar las plantas nucleares procede de tierras de los pueblos indígenas<sup>22</sup>. El uranio se extrae en explotaciones a cielo abierto, así como por medio de lixiviación y de extracción de roca dura, y con frecuencia requiere grandes cantidades de agua. Este tipo de explotaciones conducen a la producción de desechos radiactivos, que afecta

<sup>13</sup> Minority Rights, “Norway: Saami communities contend with the latest form of discrimination – ‘green colonialism’”, 2020.

<sup>14</sup> Véase [A/HRC/51/35](#).

<sup>15</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Subdivisión de Productos Químicos y Salud, *Global Mercury Supply, Trade and Demand* (Ginebra, 2017).

<sup>16</sup> PNUMA, Subdivisión de Productos Químicos y Salud, *Global Mercury Assessment 2018* (Ginebra, 2019).

<sup>17</sup> Aportación de la Fundación Gaia Amazonas.

<sup>18</sup> BOL 3/2021.

<sup>19</sup> Aportación del Consejo de Distrito de Rupununi Sur.

<sup>20</sup> Aportaciones de Cultural Survival y del CETIM y Secoya.

<sup>21</sup> Aportación de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

<sup>22</sup> Thorben Becker *et al*, *Uranium Atlas: Facts and Data about the Raw Material of the Atomic Age* (2020).

al medio ambiente y a la salud pública a nivel local<sup>23</sup>. La extracción del uranio también libera un peligroso gas radiactivo: el radón<sup>24</sup>.

22. La contaminación radiactiva puede ser grave y permanente. Desde la década de 1990, las naciones indígenas que viven cerca de minas de uranio abandonadas, como los navajos, han comunicado problemas de salud crónicos<sup>25</sup>. En los Estados Unidos, el 11 % de las 4.225 minas de uranio abandonadas se encuentran en tierras indígenas<sup>26</sup>. Los pueblos indígenas que viven cerca de minas de uranio en Mongolia expresaron preocupación por la contaminación por uranio, en particular la presencia de malformaciones y deformaciones congénitas<sup>27</sup>. El Relator Especial expresó también su preocupación por las consecuencias nocivas en el medio ambiente y los derechos humanos de la extracción potencial de uranio en el sur de Groenlandia<sup>28</sup>.

#### 4. Roturas en presas de relaves

23. El número de fallos graves en las presas de relaves aumentó de manera significativa en la última década<sup>29</sup>. En muchos proyectos de explotación minera, los relaves cargados de sustancias químicas tóxicas son una de las mayores fuentes de contaminación. La rotura de las enormes estructuras que los contienen, que se utilizan para almacenar los residuos de la actividad minera de forma indefinida, libera una multitud de materiales de desecho tóxicos y destruye las tierras de los pueblos indígenas de los alrededores. La gestión indebida de esos desechos, el uso de materiales equivocados y el empleo de presas aguas arriba aumenta la inestabilidad y la probabilidad de colapso y consiguiente contaminación<sup>30</sup>. Por ejemplo, en el Brasil, los pueblos indígenas que dependían del río Doce perdieron el acceso al agua, la producción de sus cultivos y sus medios de vida, incluida la capacidad de pesca, tras el colapso de la presa de Mariana<sup>31</sup>.

### B. Petróleo y gas

24. Las empresas de petróleo y gas continúan explorando y explotando los depósitos de hidrocarburos, incluso mientras el planeta se enfrenta a una emergencia climática. Ello se debe invariablemente a que los Estados promocionan las industrias de combustibles fósiles, con frecuencia en las tierras y los territorios de los pueblos indígenas.

25. El caso de Chevron/Texaco en la Amazonia ecuatoriana es revelador en lo que se refiere a los efectos tóxicos. Los huaoranis, los cofanes y otros pueblos indígenas vivían en un entorno de pluviselva prístina antes de la llegada de Texaco (posteriormente adquirida por Chevron) en la década de 1960. El proyecto de Texaco/Petroecuador extrajo petróleo sin prestar atención a la protección del medio ambiente ni a los derechos de los pueblos indígenas afectados. Como consecuencia de ello, las operaciones petroleras afectaron seriamente a las tierras tradicionales de

<sup>23</sup> Sierra Club, “The violence of nuclear energy against indigenous peoples, land, water and air”, 2020.

<sup>24</sup> Véase <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/uranium-mining-overview.aspx>.

<sup>25</sup> Johnnye Lewis, Joseph Hoover y Debra MacKenzie, “Mining and environmental health disparities in Native American communities”, *Current Environmental Health Reports*, vol. 4, núm. 2 (abril de 2017).

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Aportación de OT Watch Mongolia.

<sup>28</sup> AL DNK 2/2021.

<sup>29</sup> Earthworks *et al*, *Safety First: Guidelines for Responsible Mine Tailings Management* (2022).

<sup>30</sup> AL PNG 1/2020.

<sup>31</sup> Véase A/HRC/45/12/Add.2; AL BRA 11/2018.

los pueblos indígenas y a su integridad física y cultural. Los pueblos indígenas no recibieron ninguna reparación por esas violaciones de sus derechos humanos.

## 1. Exploración

26. La prospección de petróleo y gas mar adentro puede diezmar la caza de subsistencia de los pueblos indígenas. Para crear patrones en el suelo oceánico que después puedan cartografiarse con miras a la realización de perforaciones, en las pruebas sísmicas se utilizan explosivos, que generan ecos ensordecedores. Esas actividades causan pérdida de audición y cambios en los patrones migratorios de los mamíferos marinos de los que los pueblos indígenas dependen para su alimentación<sup>32</sup>.

27. Las pruebas sísmicas tierra adentro pueden ser igualmente devastadoras para la vida de los pueblos indígenas. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Ecuador responsable de la violación de varios derechos protegidos del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, después de que este permitiera a una empresa petrolera privada realizar sondeos sísmicos sin consultas ni consentimiento previos. El pueblo de Sarayaku declaró el estado de emergencia, habida cuenta de los riesgos que los explosivos de gran potencia introducían en su territorio, pues estos impedían sus actividades económicas y minaban sus fuentes de alimentos<sup>33</sup>.

## 2. Explotación

28. La extracción de petróleo libera a los ríos y el suelo enormes cantidades de sustancias peligrosas, que tienen efectos devastadores para los pueblos indígenas. Para las perforaciones en busca de petróleo y gas se emplean fluidos con elevadas concentraciones de bario y emulsionantes y cantidades variables de hidrocarburos aromáticos policíclicos que impregnan la tierra y los ecosistemas. Esas sustancias pueden provocar cáncer y enfermedades cardiovasculares<sup>34</sup>. La fracturación hidráulica y las arenas alquitranadas también generan contaminantes tóxicos que son cancerígenos, como metales pesados y sustancias aromáticas policíclicas que se liberan a las aguas superficiales y subterráneas<sup>35</sup>.

29. La extracción de petróleo y gas libera grandes cantidades de lo que se denomina “agua de producción” (agua contaminada que sale de los pozos petroleros durante la extracción). El agua de producción está compuesta por una mezcla peligrosa que puede contener hidrocarburos, metales pesados, sales y material radiactivo presente de manera natural, con posibles efectos cancerígenos<sup>36</sup>. Incluso cuando se reinyecta en el subsuelo, los pozos son con frecuencia defectuosos, y expanden la contaminación a las aguas subterráneas, las poblaciones de peces y otras especies acuáticas.

30. Los efluentes y desechos líquidos de las operaciones de extracción de petróleo y gas se almacenan con frecuencia en depósitos a cielo abierto. Incluso cuando las empresas utilizan revestimientos plásticos, estos tienden a desbordarse y tener fugas, soltando petróleo y grasa y contaminando las fuentes de agua y alimentos de las que los pueblos indígenas dependen para su subsistencia. Los efluentes y desechos

<sup>32</sup> Annette L. Bickford, “Drivers of climate change: seismic testing and human security in Nunavut”, abril de 2017.

<sup>33</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador*, sentencia de 27 de junio de 2012.

<sup>34</sup> Manthar Ali Mallah *et al*, “Polycyclic aromatic hydrocarbon and its effects on health: an overview”, *Chemosphere*, vol. 296, junio de 2022.

<sup>35</sup> Clinton N. Westman y Tara L. Joly, “Oil sands extraction in Alberta, Canada: a review of impacts and processes concerning indigenous peoples”, *Human Ecology*, vol. 47, núm. 2 (abril de 2019); véase [www.biologicaldiversity.org/campaigns/fracking/](http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/fracking/).

<sup>36</sup> Véase [www.nrdc.org/sites/default/files/fracking-drinking-water-fs.pdf](http://www.nrdc.org/sites/default/files/fracking-drinking-water-fs.pdf).



líquidos también se almacenan en tanques subterráneos, pero estos se corroen o se desbordan, contaminando los suelos y los cursos de agua.

31. La quema en antorcha, que consiste en quemar el gas generado durante los procesos de extracción, genera una contaminación atmosférica constante. La quema de gas en antorcha libera varios contaminantes peligrosos que pueden incluir, entre otros, benceno, formaldehído, hidrocarburos aromáticos policíclicos, acetaldehído, tolueno y xilenos<sup>37</sup>, y puede producir anomalías en el sistema reproductor, asma y cáncer<sup>38</sup>.

32. El abandono de los campos petrolíferos sin retirar debidamente la infraestructura utilizada para explotar el petróleo provoca daños en el entorno circundante a medida que esas estructuras se van erosionando. En su evaluación ambiental de Ogonilandia (Nigeria) en 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente llegó a la conclusión de que, entre otros efectos negativos, la contaminación en algunas zonas tenía dimensiones de “devastación ambiental total”, había desplazado o había puesto fin a las actividades pesqueras del pueblo ogoni y había contaminado las aguas subterráneas con cantidades de benceno inaceptables según la Organización Mundial de la Salud<sup>39</sup>. Según el pueblo ogoni, la remediación ambiental efectiva ha sido entre escasa y nula, incluso diez años después<sup>40</sup>.

### 3. Derrames de petróleo y zonas contaminadas

33. Los derrames de petróleo son frecuentes y devastadores. Las sustancias aromáticas cancerígenas que se liberan en los derrames de petróleo pueden permanecer en el agua y los sedimentos de los cursos de agua durante largos períodos de tiempo, lo que aumenta la exposición a sustancias tóxicas. Según se informa, en 40 años se han producido en Alaska casi 10.000 derrames de petróleo como consecuencia de la exploración y la explotación de petróleo cerca de las tierras indígenas de Nuiqsut; en ellos se han vertido 14,4 millones de litros de petróleo y materiales peligrosos<sup>41</sup>.

34. En 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú confirmó la existencia de casi 2.000 lugares contaminados en el Lote 192 que afectan a los pueblos amazónicos quechua, kichwa y achuar y que todavía no han sido rehabilitados<sup>42</sup>. En ese país, 41 de los 65 grupos indígenas se han visto afectados por la extracción de petróleo: entre 2015 y 2019 sufrieron más de 100 derrames de petróleo<sup>43</sup>.

35. Gran cantidad de los buques que se emplean para el transporte marítimo emplean fueloil pesado, un producto del petróleo particularmente denso y viscoso, persistente cuando se produce un derrame, y que asfixia a las aves y los mamíferos marinos<sup>44</sup>. Los pueblos indígenas costeros y del Ártico se ven amenazados por su dependencia de esos animales y por su proximidad a esas sustancias tóxicas<sup>45</sup>. El

<sup>37</sup> Véase [https://earthworks.org/issues/flaring\\_and\\_venting/](https://earthworks.org/issues/flaring_and_venting/).

<sup>38</sup> Okhumode H. Yakubu, “Addressing environmental health problems in Ogoniland through implementation of United Nations Environment Programme recommendations: environmental management strategies”, *Environments*, vol. 4, núm. 2 (marzo de 2017).

<sup>39</sup> PNUMA, *Environmental Assessment of Ogoniland* (Nairobi, 2011).

<sup>40</sup> Información procedente de la consulta sobre los pueblos indígenas en África y en el Ártico de Escandinavia y Groenlandia llevada a cabo el 19 de mayo de 2022.

<sup>41</sup> Aportación de Earthjustice Alaska.

<sup>42</sup> AL PER 3/2021.

<sup>43</sup> Aymara León y Mario Zúñiga, *La sombra del petróleo: informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019* (Lima, Oxfam, 2021).

<sup>44</sup> Estados Unidos de América, Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, “Heavy fuel oil spills”, agosto de 2019.

<sup>45</sup> AL AUS 5/2020.

fueloil pesado también produce elevados niveles de carbono negro, que se sabe que conduce a la muerte prematura. Además, el carbono negro absorbe tanta luz solar que funde la nieve y el hielo, amenazando en particular a las tierras y los territorios indígenas del Ártico<sup>46</sup>.

## C. Plaguicidas

36. En varios países, los agronegocios están apoderándose de las tierras indígenas y cultivando una agricultura dependiente de los plaguicidas. Como consecuencia de ello, los pueblos indígenas pueden verse obligados a vivir junto a esas explotaciones agrícolas, exponiéndose de manera habitual a plaguicidas peligrosos. Además, los países que han prohibido los plaguicidas altamente tóxicos o que tienen existencias antiguas de estos permiten exportar la producción local<sup>47</sup>.

37. Los pueblos indígenas que producen cultivos en pequeña escala utilizando plaguicidas pueden tener conocimientos generales sobre la protección de los cultivos, pero con frecuencia desconocen los efectos de los plaguicidas sobre la salud y las formas de exposición. Debido a esta falta de conocimientos, los incidentes relacionados con el uso indebido de esas sustancias químicas llevaron a una exposición aguda y crónica de los pueblos indígenas de la zona occidental de Australia a los plaguicidas<sup>48</sup>.

38. Además, las existencias de plaguicidas obsoletos, como los plaguicidas organoclorados y organofosforados, con frecuencia no están debidamente contabilizados en los inventarios y se almacenan en condiciones inapropiadas, de modo que contaminan y dañan los depósitos y causan fugas<sup>49</sup>. El hecho de que en muchos países falte un marco jurídico y capacidad institucional para hacer frente a este problema ha aumentado sus efectos nocivos sobre los pueblos indígenas<sup>50</sup>.

### 1. Monocultivos

39. El uso de plaguicidas se ha vinculado a los monocultivos en gran escala, que suministran la mayor parte de los alimentos básicos de la industria alimentaria mundial<sup>51</sup>. Los monocultivos aumentan el riesgo de enfermedades y plagas, lo cual lleva a los agricultores a utilizar una mayor cantidad de plaguicidas y herbicidas<sup>52</sup>. Las plagas pueden entonces volverse resistentes a los plaguicidas, lo cual aumenta a su vez el uso de estos, creando un círculo tóxico. En El Salvador, parece que la contaminación producida por los productos agroquímicos, el riego intensivo y la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar están contribuyendo al número alarmante de casos de enfermedades de riñón crónicas y a la escasez de agua<sup>53</sup>.

### 2. Fumigación aérea

40. La fumigación aérea extiende de manera indiscriminada sustancias tóxicas sobre los cultivos y las aguas de las que dependen los pueblos indígenas para su sustento material y espiritual. El polvo o las gotículas de los plaguicidas se dispersan por el

<sup>46</sup> Aportación de la Clean Arctic Alliance.

<sup>47</sup> OL OTH 202/2021 y OL OTH 203/2021.

<sup>48</sup> Aportación del Nulungu Research Institute y de la Universidad de Notre Dame en Australia.

<sup>49</sup> Véase [UNEP/CHW.15/INF/50](#).

<sup>50</sup> Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea, 15ª reunión, decisión (CRP.22).

<sup>51</sup> Allison Balogh, "The rise and fall of monoculture farming", *Horizon*, 13 de diciembre de 2021.

<sup>52</sup> Beyond Pesticides, "Multi-crop (mixed culture) farming practices promote more fruitful farmland than single-crop (monoculture)", 15 de julio de 2021.

<sup>53</sup> Aportación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.

aire y dañan cultivos sobre los que los plaguicidas no se rociaron, así como sobre los suelos, las aguas, la vegetación y la vida silvestre<sup>54</sup>.

41. Los pueblos indígenas y otros en el Brasil alegan que los agronegocios rocían intencionadamente plaguicidas sobre sus cultivos y viviendas como “armas químicas” para echarlos de sus tierras, a fin de que estas puedan ser utilizadas por los ranchos y las explotaciones agrícolas<sup>55</sup>.

42. Durante decenios, los pueblos indígenas de Colombia expresaron su preocupación por la fumigación aérea en gran escala de formulaciones con glifosato para erradicar los cultivos de coca ilícitos<sup>56</sup>. En su informe reciente, la Comisión de la Verdad de Colombia, establecida en virtud del acuerdo de paz de 2016, pide que se acabe definitivamente con la fumigación con glifosato<sup>57</sup>.

43. El pueblo yaqui abogó en México y en los mecanismos internacionales por la prohibición de la fumigación aérea basándose en los efectos documentados que tiene para la salud reproductiva e intergeneracional, entre ellos anomalías congénitas, leucemia y otros cánceres infantiles<sup>58</sup>. En respuesta a ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a los Estados Unidos que tomara medidas para evitar los efectos transfronterizos de los plaguicidas que se utilizan en la fumigación aérea, pero fue en vano<sup>59</sup>.

## D. Vertimiento de desechos peligrosos

44. El vertimiento de desechos peligrosos deja a los pueblos indígenas con efectos traumáticos psicológicos y de salud que duran decenios. Además, los efectos tóxicos se extienden mucho más allá de la zona en que estos se vierten. La quema de desechos contamina el aire y genera contaminantes nocivos para la vida humana y animal<sup>60</sup>. Cada año, se vierten a los océanos 11 millones de toneladas de desechos plásticos<sup>61</sup>. La basura marina y la contaminación por plásticos provocan la lixiviación de sustancias químicas que terminan en los cursos de agua, y los contaminantes persistentes capaces de transportarse a largas distancias por medio de las corrientes llegan al Ártico, donde afectan a los pueblos indígenas de la región<sup>62</sup>.

45. Con frecuencia, las protestas por el daño que se hace a los pueblos indígenas son desoídas. Por ejemplo, el pueblo yami de la isla de las Orquídeas, en la Provincia China de Taiwán, ha luchado durante decenios por que se retiren 100.000 barriles de desechos nucleares colocados allí sin su consentimiento libre, previo e informado; sin embargo, la Provincia China de Taiwán todavía no ha retirado los desechos<sup>63</sup>. La comunidad kanien'kehá:ka de Kanehsatà:ke, en el Canadá, sigue luchando por que se contenga el vertimiento de desechos tóxicos que se está llevando a cabo sin un

<sup>54</sup> Aportación de Martina Mutizábal y Dasten Julián Vejar; véase <http://npic.orst.edu/reg/drift.html>.

<sup>55</sup> AL BRA 6/2022 y AL BRA 8/2022.

<sup>56</sup> UA COL 13/2020 y OL COL 4/2021.

<sup>57</sup> Colombia, informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 28 de junio de 2022.

<sup>58</sup> Aportaciones del Gobierno de México y de las naciones hunkpati dakota y yaqui.

<sup>59</sup> Aportación de las naciones hunkpati dakota y yaqui.

<sup>60</sup> Navarro Ferronato y Vincenzo Torretta, “Waste mismanagement in developing countries: a review of global issues”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 16, núm. 6 (marzo de 2019).

<sup>61</sup> Véase [www.pewtrusts.org/en/trust/archive/fall-2020/confronting-ocean-plastic-pollution](http://www.pewtrusts.org/en/trust/archive/fall-2020/confronting-ocean-plastic-pollution).

<sup>62</sup> Aportaciones del Centre de reserche du CHU de Québec-Université Laval y de Environment and Climate Change Canada.

<sup>63</sup> Véase <https://beyondthebomb.org/a-nuclear-war-on-orchid-island/>.

permiso cerca de la comunidad y que está contaminando los sistemas de abastecimiento de agua<sup>64</sup>.

## E. Actividades militares

46. En todo el mundo, la militarización inflige violencia ambiental en las tierras de los pueblos indígenas. Las bases militares se construyen en las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento y, con frecuencia, obligan a su desplazamiento. Una vez abandonadas, esas zonas militares dejan restos trágicos de contaminación, que llena esas tierras de desechos nucleares y peligrosos que afectan a los pueblos indígenas durante generaciones.

47. Según las informaciones, las instalaciones militares abandonadas dejan materiales, como combustibles, bifenilos policlorados, metales procedentes del equipo pesado, generadores de energía, contenedores de petróleo, e incluso desechos radiactivos enterrados *in situ*<sup>65</sup>. Los restos de combustibles, disolventes y otras sustancias químicas inorgánicas pueden filtrarse al suelo y recorrer grandes distancias<sup>66</sup>. Con frecuencia, el Gobierno no revela información sobre el alcance, la ubicación o el tipo de desechos ni realiza evaluaciones completas de los riesgos para los pueblos indígenas.

48. Esos proyectos militares se desarrollan con frecuencia en islas o en lugares remotos, donde los sistemas de abastecimiento de agua están interconectados, con lo que amenazan a toda la región. En Kapūkākī (Red Hill), de los depósitos de combustible almacenado se vertieron más de 9.092 litros de petróleo, que contaminaron las aguas de los nativos hawaianos cercanos<sup>67</sup>. Los derrames de petróleo en la zona son crónicos (se vierten 5.000 toneladas de petróleo al año) y ponen en peligro el abastecimiento de agua de toda la isla de Oahu<sup>68</sup>. Los desechos que ha dejado la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de armas y sustancias químicas peligrosas amenazan al pueblo chamorro y al acuífero de fuente única de Guam<sup>69</sup>.

49. Igualmente preocupante es la detección continua de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, también conocidas como “sustancias químicas eternas” porque son resistentes a la descomposición en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Al parecer, los accidentes, las fugas y las labores de entrenamiento y desecho han provocado la contaminación con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas procedentes de las bases de los Estados Unidos y el Japón en las islas Ryuku (Japón), donde los niveles de estas sustancias son hasta 1.600 veces superiores a la norma nacional<sup>70</sup>.

50. Los pueblos indígenas del Ártico también se enfrentan a amenazas complejas como consecuencia del derretimiento del permafrost que recubre capas de sustancias tóxicas. En Camp Century, bajo la parte noroccidental del manto de hielo de Groenlandia podrían quedar expuestas toneladas de desechos tóxicos, incluidos

<sup>64</sup> Aportación de la comunidad kanien'kehá:ka de Kanehsatà:ke.

<sup>65</sup> En las plantas de Hanford hay 177 tanques que contienen 254 millones de litros de desechos líquidos; de ellos, es posible que 67 tengan fugas. Véase Allison Macfarlane, “‘Incidental’ nuclear waste: reconceiving a problem won’t make it go away”, *Bulletin of the Atomic Scientists*, 31 de enero de 2019.

<sup>66</sup> Aportación de Alaska Community Action on Toxics.

<sup>67</sup> Aportación del Grupo Mundial de Jóvenes Indígenas.

<sup>68</sup> Información procedente de la consulta sobre los pueblos indígenas en Asia, el Pacífico y la Federación de Rusia llevada a cabo el 18 de mayo de 2022.

<sup>69</sup> AL USA 7/2021.

<sup>70</sup> Aportación de la Asociación de Estudios Integrales para la Independencia de los Lew Chewans.

bifenilos policlorados y material radiactivo, como consecuencia del cambio climático y del derretimiento del hielo<sup>71</sup>.

### III. La repercusión de las sustancias tóxicas en los derechos humanos de los pueblos indígenas

51. A fin de satisfacer la expansión de una economía mundial adicta a los combustibles fósiles y a la extracción de recursos, los Estados y las empresas se adentran en regiones remotas en busca de metales, minerales e hidrocarburos, dejando tras ellos un legado de contaminación y vertidos de sustancias peligrosas. La exposición a esas sustancias tóxicas supone un alto precio para la integridad física y otros derechos de los pueblos indígenas.

52. En muchas partes del mundo, la soberanía del Estado y su control efectivo sobre el territorio no son sino principios ficticios, pues la capacidad del Estado para regular de manera efectiva los combustibles fósiles y las industrias extractivas y garantizar la protección efectiva de los derechos es una ilusión. En muchas otras partes, los Estados utilizan esos principios para intentar legitimar la extracción de los recursos naturales que se encuentran en las tierras y los territorios indígenas, a pesar de que ello supone la violación generalizada de los derechos de esos pueblos.

#### A. Consentimiento libre, previo e informado

53. Los pueblos indígenas ven sistemáticamente negado su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Como destacó el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, al negarles el consentimiento libre, previo e informado, se está sacrificando la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación por intereses nacionales y económicos, sin tener en cuenta su seguridad y su bienestar<sup>72</sup>.

54. El proceso de consentimiento libre, previo e informado se basa en el diálogo de buena fe y en el respeto por las decisiones de los pueblos indígenas<sup>73</sup>. Ello incluye entablar un diálogo con las instituciones que representan los pueblos indígenas, respetando los protocolos de consulta convenidos mutuamente, y aplicar los resultados acordados. Esos elementos forman la base del respeto por los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación como piezas clave del derecho al consentimiento libre, previo e informado. En ocasiones, incluso cuando hay un diálogo y se celebran consultas, ello no sucede antes del comienzo de los proyectos de explotación o no continúa durante las diversas etapas de este.

55. El proceso de consentimiento libre, previo e informado implica el deber de proporcionar información exhaustiva y comprensible desde el punto de vista cultural. Sin embargo, la información que se presenta a los pueblos indígenas es, con frecuencia, limitada o inaccesible. Con frecuencia, las evaluaciones del impacto ambiental no están a disposición de los pueblos indígenas antes de las consultas y, en demasiadas ocasiones, los Estados no prestan a los pueblos indígenas los servicios técnicos necesarios para comprender plenamente la información que figura en las evaluaciones ambientales<sup>74</sup>. La compañía minera Nor Nickel, que tiene su operación principal en Norilsk (Federación de Rusia), una de las ciudades más contaminadas

<sup>71</sup> William Colgan *et al.*, “The abandoned ice sheet base at Camp Century, Greenland, in a warming climate”, *Geophysical Research Letters*, vol. 43, núm. 15 (agosto de 2016).

<sup>72</sup> A/HRC/12/34, párrs. 41 y 42 y 54 a 57.

<sup>73</sup> A/HRC/45/34, secc. IV.

<sup>74</sup> Aportación del Gobierno de Honduras.

del mundo, inició con el tiempo un proceso de consentimiento libre, previo e informado con el pueblo indígena de la zona, pero impuso sus propios protocolos<sup>75</sup>.

56. El derecho al consentimiento libre, previo e informado es un derecho que hace posibles otros derechos con los que guarda relación, como los derechos a la información, a los conocimientos científicos, a la tierra, al acceso a la justicia, a una participación significativa y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En ese sentido, el consentimiento libre, previo e informado es fundamental para proteger los derechos de los pueblos indígenas, que pueden verse comprometidos como consecuencia de la exposición a sustancias tóxicas. Al mismo tiempo, y especialmente dado que las corrientes atmosféricas y oceánicas transportan las sustancias tóxicas a grandes distancias dentro de los territorios de los pueblos indígenas, el respeto del consentimiento libre, previo e informado no agota las obligaciones de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

## **B. La información, el acceso a la justicia y los conocimientos científicos**

57. Con frecuencia, los Estados y las empresas no garantizan el acceso de los pueblos indígenas a la información y los conocimientos científicos sobre los efectos tóxicos de las actividades que se desarrollan en sus tierras y territorios o cerca de ellos. A menudo, la información solo está disponible a través de Internet y en un pequeño número de idiomas. En otros casos, los Estados se niegan de plano a proporcionar información sobre las repercusiones de las sustancias tóxicas en los pueblos indígenas. Hay además cuestiones estructurales que contribuyen a la falta de información de los pueblos indígenas, como el hecho de que muchos de ellos viven en la pobreza y carecen de los recursos técnicos o el nivel de educación para comprender información especializada sobre los efectos de las sustancias tóxicas y sus repercusiones.

58. La falta de información agrava las dificultades a que se enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia por violaciones de los derechos humanos. Los pueblos indígenas están con frecuencia excluidos de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y de los sistemas jurídicos nacionales debido a barreras lingüísticas y culturales, a su ubicación en lugares remotos y a la falta de recursos económicos para obtener una defensa jurídica especializada. Los Estados rara vez solicitan los conocimientos indígenas y, con frecuencia, niegan el uso de los sistemas de justicia indígenas, de modo que estos pueblos deben utilizar sus limitados recursos para abogar por sí mismos.

59. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus) brindan vías y oportunidades para la participación indígena en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, también en lo que respecta a las sustancias químicas y los desechos. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, dispone que cada parte facilitará que los pueblos indígenas reciban asistencia para preparar sus peticiones de información y obtener respuesta<sup>76</sup>.

60. La investigación y los conocimientos científicos sobre el impacto ambiental de las sustancias tóxicas específico en los pueblos indígenas son escasos. Además, tanto

<sup>75</sup> Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, *El mundo indígena 2022*, págs. 562 y 563).

<sup>76</sup> Art. 5 3) y 4).

la ciencia como los conocimientos indígenas también tienen una función que desempeñar a la hora de hallar soluciones y medidas preventivas específicas desde el punto de vista cultural para la exposición a sustancias tóxicas<sup>77</sup>. En los casos en que los Gobiernos realizan inspecciones o estudios, con frecuencia no los hacen públicos. Por ejemplo, el pueblo guji en Etiopía sigue pidiendo que el Gobierno haga público un informe que demuestra el impacto ambiental y los efectos sobre la salud de la mina de oro de Lega Dembi<sup>78</sup>.

### C. Cultivos, tierra y recursos naturales

61. La exposición a sustancias tóxicas de los vertidos o las emisiones de la industria constituye una forma de violencia contra los pueblos indígenas. Debido a los vínculos espirituales y materiales entre su cultura, la tierra y los recursos naturales, romper la conexión de los pueblos indígenas con su tierra pone en peligro la supervivencia de las culturas y los idiomas indígenas.

62. La contaminación con sustancias peligrosas interfiere con el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en virtud del cual persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Además, la degradación ambiental y el desplazamiento de los pueblos indígenas tienen un impacto directo en sus prácticas culturales, con frecuencia íntimamente ligadas a su tierra. Los Estados deberían reconocer los derechos indígenas a la tierra, incluidas las zonas que los pueblos indígenas utilizan para sus prácticas espirituales, medicinales u otras prácticas tradicionales.

63. En el caso del pueblo ava guaraní de Campo Agua'ẽ, en la zona oriental del Paraguay, el Comité de Derechos Humanos reconoció que no impedir la contaminación de las tierras y territorios indígenas con plaguicidas era también un ataque contra la cultura y las tradiciones indígenas<sup>79</sup>. Para llegar a esa decisión, el Comité se basó en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a fin de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que otorga mayor fuerza normativa a la Declaración.

64. Para los derechos a la cultura, la tierra y los recursos naturales en casos de violaciones es fundamental el derecho a la reparación, que incluye la remediación, la restitución y la devolución de las tierras, territorios y recursos<sup>80</sup>.

### D. Vida, salud e integridad personal

65. La exposición a sustancias tóxicas tiene efectos a corto y a largo plazo en la vida y la salud de los pueblos indígenas. La exposición a sustancias tóxicas constituye una agresión a la integridad personal. Incluso en pequeñas cantidades, el mercurio, el cadmio, el plomo y el arsénico pueden causar serios problemas de salud y son una amenaza para la salud reproductiva y el desarrollo en las primeras etapas de la vida<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> A/HRC/48/61, párr. 19.

<sup>78</sup> Aportación de Development by Unity and Brotherly Action for the Future y del Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Pritzker de Northwestern University.

<sup>79</sup> CCPR/C/132/D/2552/2015, párr. 8.5.

<sup>80</sup> Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 28; véase también Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recomendación general núm. 23 (1997), relativa a los derechos de los pueblos indígenas.

<sup>81</sup> Organización Mundial de la Salud, "El mercurio y la salud", 31 de marzo de 2017; y Peter Massányi *et al*, "Effects of cadmium, lead, and mercury on the structure and function of reproductive organs", *Toxics*, vol. 8, núm. 4 (diciembre de 2020), que puede consultarse en

A largo plazo, la presencia de sustancias tóxicas en las tierras indígenas o cerca de ellas ha causado discapacidad intelectual y otros tipos de discapacidad que pueden socavar la capacidad de los pueblos indígenas para transmitir su cultura y sus tradiciones.

66. Los pueblos indígenas que viven cerca de explotaciones mineras son más vulnerables a las enfermedades respiratorias. La exposición a partículas en suspensión se asocia a la muerte prematura y a una elevada morbilidad asociadas a las enfermedades cardiopulmonares. Los desechos radiactivos aumentan el riesgo de cáncer, las anomalías congénitas y los índices de mortalidad. Otras formas de exposición incluyen la inhalación de partículas radiactivas en suspensión y la exposición a la radiación gamma, ambas de las cuales aumentan el riesgo de cáncer.

67. La contaminación de los alimentos y el agua da lugar a la exposición a sustancias tóxicas a través de la cadena alimentaria, que provoca inmunosupresión, trastornos hormonales y cáncer, entre otros problemas serios de salud. Ello también puede causar serios problemas de salud mental, como ansiedad, pérdida de identidad y pérdida de la esperanza. Los intentos de los pueblos indígenas por defenderse de esas incursiones con frecuencia resultan en violencia contra ellos<sup>82</sup>.

68. Los productos agroquímicos tóxicos han afectado de manera particularmente negativa a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchos plaguicidas se acumulan en los organismos vivos, aumentando con ello el riesgo de exposición por medio de fuentes alimentarias. Se sabe que la bioacumulación tiene efectos nocivos, entre otros, en la función endocrina y reproductora y que provoca cáncer, envenenamientos accidentales y la muerte. La exposición a los plaguicidas también ha causado abortos, partos prematuros y anomalías congénitas<sup>83</sup>.

69. En los artículos 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconocen el derecho a la vida y la integridad física, respectivamente. Así pues, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a un entorno no tóxico para los pueblos indígenas.

70. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al disfrute del “más alto nivel posible de salud física y mental”. En su observación general núm. 14 (2000), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales explica que “el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud”<sup>84</sup>.

71. El derecho a la salud incluye el acceso a atención de la salud oportuna y accesible para los efectos específicos de las sustancias tóxicas en la salud. Para ello, es necesario integrar la medicina moderna con las prácticas medicinales y los conocimientos tradicionales indígenas<sup>85</sup>. Sin embargo, el acceso a una atención adecuada de la salud con frecuencia es deficiente, y la contaminación en los territorios indígenas da lugar a problemas de salud crónicos que quedan sin tratar.

[www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7711607/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7711607/).

<sup>82</sup> AL BRA 3/2021, AL CHN 11/2018, AL ECU 3/2018 y AL MEX 7/2018.

<sup>83</sup> Véase A/HRC/34/48.

<sup>84</sup> Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 14 (2000), párr. 4.

<sup>85</sup> Véase la aportación del Gobierno de Guatemala.



## E. Alimentación, agua y un medio ambiente limpio y saludable

72. Los efectos tóxicos en la vegetación y la vida silvestre reducen la biodiversidad y afectan a las fuentes de agua, alimentos y medicina de los pueblos indígenas.

73. Los pueblos indígenas dependen de los recursos naturales para sus economías de subsistencia, por lo que dependen de las fuentes naturales de agua para beber, para su alimentación y para otras prácticas tradicionales o domésticas. Sin embargo, la contaminación con sustancias tóxicas afecta al agua, propagando enfermedades y la muerte en la tierra y los pueblos que la habitan<sup>86</sup>.

74. Tan solo la actividad minera genera cada año cientos de millones de desechos que contaminan fuentes de agua vitales<sup>87</sup>. De manera similar, la contaminación procedente de las perforaciones para la extracción de petróleo y gas repercute seriamente en la calidad del agua dulce. La contaminación aumenta el riesgo de exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados como el níquel y el plomo para los pueblos indígenas que dependen de los ríos y los arroyos como fuente principal de abastecimiento de agua<sup>88</sup>. En los yacimientos de petróleo y gas, el agua de producción, agua contaminada que sale de los pozos de petróleo durante la extracción, puede contaminar los ríos que utilizan la vida silvestre y los pueblos indígenas con elevados niveles de metales pesados<sup>89</sup>. La rotura de las presas de relaves mineros tiene efectos de larga duración en las fuentes de alimentos y de agua. Los pueblos indígenas pierden el acceso al agua, la producción de cultivos y los medios de subsistencia, incluida la capacidad pesquera<sup>90</sup>.

75. De conformidad con la observación general núm. 12 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a una alimentación adecuada requiere “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada”. Además, la disponibilidad requiere una tierra productiva u otros recursos naturales libres de contaminación.

76. La flagrante falta de protección del derecho de los pueblos indígenas a la alimentación se da en diversos sectores e industrias. Muchas sustancias tóxicas pueden extender la contaminación a través de redes alimentarias que a menudo incluyen especies de fauna y flora silvestres que consumen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas sufren una incidencia superior a la media del cáncer y otras enfermedades como consecuencia de los plaguicidas en sus fuentes alimentarias<sup>91</sup>. En todo el mundo, las actividades de extracción de oro en pequeña escala dispersan mercurio en los sistemas de abastecimiento de agua y contaminan las poblaciones de peces de los pueblos indígenas. La contaminación radiactiva procedente del uranio puede afectar a los animales, por ejemplo al ganado, y pasar a la leche y la carne de las vacas que se destina al consumo.

77. Con frecuencia se observa que las fuentes tradicionales de alimentación de los pueblos indígenas contienen niveles elevados de sustancias químicas nocivas. Dado que los contaminantes orgánicos persistentes viajan también en dirección norte, recorriendo grandes distancias por medio de las corrientes de agua y los vientos, ello ha afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas del Ártico. Los contaminantes orgánicos persistentes procedentes de los materiales abandonados en

<sup>86</sup> [A/HRC/36/46/Add.1](#), secc. IV.C.2.

<sup>87</sup> Anongos *et al*, *Pitfalls and Pipelines*.

<sup>88</sup> Aportación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

<sup>89</sup> Raúl Yusta-García *et al*, “Water contamination from oil extraction activities in Northern Peruvian Amazonian rivers”, *Environmental Pollution*, vol. 225, junio de 2017.

<sup>90</sup> Aportación de Franciscans International.

<sup>91</sup> Véase [A/HRC/34/48](#).

instalaciones militares también pueden bioacumularse en la cadena alimentaria y exponer a los pueblos indígenas a sustancias tóxicas<sup>92</sup>.

78. Las empresas y los Estados con frecuencia destruyen la vegetación y la vida silvestre en las tierras y los territorios indígenas y en sus alrededores. Las industrias extractivas y los productos agroquímicos contaminan el aire, el suelo, el agua y la cadena alimentaria con sustancias tóxicas<sup>93</sup>. Las sustancias químicas tóxicas y los desechos peligrosos degradan la tierra indígena y el papel de los pueblos indígenas de protectores de la mayor parte de la biodiversidad mundial<sup>94</sup>.

79. El derecho a vivir en un medio ambiente no tóxico es uno de los elementos del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible<sup>95</sup>. En 2021, el Consejo de Derechos Humanos reconoció ese derecho, reconociendo que los pueblos indígenas experimentan la violencia contra su medio ambiente de manera más aguda. Recientemente, la Asamblea General también ha reconocido este derecho<sup>96</sup>.

80. El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho autónomo que se deriva de los derechos a la vida, la integridad física, la salud y a un nivel de vida adecuado. Su contenido puede hallarse en el acervo de los derechos humanos y la jurisprudencia y la doctrina ambientales desarrolladas a lo largo de los últimos 30 años. En consecuencia, este derecho engloba elementos de procedimiento, como la información, la participación y la justicia, y elementos sustantivos, como el aire no contaminado, agua potable suficiente, alimentos saludables y producidos de manera sostenible, una biodiversidad y ecosistemas sanos, entornos no tóxicos y un clima sin riesgos<sup>97</sup>. Su contenido también está iluminado por el derecho a la ciencia y el imperativo de hacer frente a las amenazas medioambientales que menoscaban la realización de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. El derecho a un medio ambiente sano puede exigir protecciones inmediatas, como cuando la integridad física se ve agredida por la exposición a sustancias tóxicas. Además, para la realización progresiva del derecho es necesario que se fortalezcan las instituciones, las normas, las políticas y las medidas, como cuando los Gobiernos apoyan las prácticas y los mercados agroecológicos.

#### **IV. Repercusiones sobre los pueblos indígenas en situaciones vulnerables**

81. Como consecuencia de una historia de desposesión de sus tierras y de discriminación en el ejercicio de los derechos políticos y otros derechos, los pueblos indígenas son todavía hoy particularmente vulnerables a las fuerzas externas que invaden sus tierras y territorios. Esas fuerzas incluyen un complejo militar e industrias extractivas, fósiles y agrícolas que buscan controlar y beneficiarse de la explotación de los recursos naturales. Las tecnologías que aplican esas industrias liberan invariablemente sustancias químicas tóxicas al medio ambiente. Las formas en que esas sustancias tóxicas repercuten en los pueblos indígenas dependen de vulnerabilidades interseccionales.

<sup>92</sup> Organización Mundial de la Salud, *Health Risks of Persistent Organic Pollutants from Long-Range Transboundary Air Pollution* (2003).

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Véase [www.unep.org/news-and-stories/story/indigenous-peoples-and-nature-they-protect](http://www.unep.org/news-and-stories/story/indigenous-peoples-and-nature-they-protect).

<sup>95</sup> Véase A/HRC/49/53.

<sup>96</sup> Véase la resolución 76/300 de la Asamblea General.

<sup>97</sup> Véase A/HRC/43/53.

## A. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento

82. Los pueblos indígenas en aislamiento sufren efectos devastadores como consecuencia de las sustancias tóxicas porque están plenamente integrados con su medio ambiente y dependen de él para su salud, su bienestar material y espiritual y su desarrollo. La contaminación de los ríos que atraviesan los territorios de los pueblos indígenas que viven en aislamiento, causada por el uso de mercurio en la extracción de oro en pequeña escala, es particularmente insidiosa, pues el metal líquido es, por lo demás, invisible, y los pueblos afectados no saben qué es lo que causa sus dolencias. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento no tienen acceso a sistemas de atención de la salud que no sean sus prácticas tradicionales, que, no obstante, pueden verse mermadas por la presencia de contaminantes tóxicos en las fuentes de alimento y las plantas medicinales. El contacto forzado ha sido catastrófico para los pueblos indígenas, cuyo sistema inmunitario no es capaz de resistir los gérmenes que llevan las personas externas<sup>98</sup>.

## B. Las personas indígenas con discapacidad<sup>99</sup>

83. La exposición a sustancias tóxicas puede causar discapacidad en las personas indígenas, como pérdida de coeficiente intelectual, malformaciones físicas y otras afecciones serias. La discapacidad puede afectar a la capacidad de la persona para procurarse medios de subsistencia, y afecta también a la capacidad de la comunidad para transmitir los conocimientos tradicionales entre las distintas generaciones. Es posible que las personas indígenas que tenían una discapacidad antes de la contaminación sientan además los efectos de problemas de salud adicionales. Los Estados no atienden los derechos de los indígenas relacionados con la discapacidad al obligar a las personas con discapacidad a desplazarse a tierras no indígenas para obtener recursos y atención sanitaria<sup>100</sup>. En muchos casos, los pueblos indígenas están empobrecidos y tienen recursos limitados para la asistencia y el cuidado y la crianza de los niños con discapacidad.

84. En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de formas múltiples o agravadas de discriminación, también por motivo de su origen indígena. Las personas indígenas con discapacidad deben enfrentarse a múltiples formas de discriminación y a barreras relacionadas con sus múltiples identidades, que aumentan sus dificultades con el empleo, el acceso a los servicios de salud y de atención a la discapacidad, y la privación social. La contaminación con sustancias tóxicas y sus efectos en su cuerpo, sus tierras y sus recursos agravan aún más esas condiciones y situaciones<sup>101</sup>.

<sup>98</sup> Esteban Ortiz-Prado *et al.*, “Avoiding extinction: the importance of protecting isolated Indigenous tribes”, *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, vol. 17, núm. 1 (marzo de 2021).

<sup>99</sup> Muchos pueblos indígenas no utilizan el término discapacidad para describir las diferencias en las capacidades, pues ven las deficiencias como naturales y excepcionales, y las descripciones de las cuestiones de discapacidad, en cambio, exploran la opresión y la asimilación a la que se obliga a los pueblos indígenas dentro de los Estados. Véase Minerva C. Rivas Velarde, *Indigenous Persons with Disabilities: Access to Training and Employment* (Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2015).

<sup>100</sup> Información procedente de la consulta sobre los pueblos indígenas en las Américas, el Caribe y el Ártico de Alaska y el Canadá llevada a cabo el 17 de mayo de 2022.

<sup>101</sup> Rivas Velarde, *Indigenous Persons with Disabilities*.

## C. Las mujeres indígenas

85. La exposición a sustancias tóxicas es una forma de violencia ambiental contra las mujeres y las niñas. Para muchos pueblos indígenas, las mujeres tienen un papel fundamental, como recolectoras, productoras y guardianas de prácticas culturales concretas. Ese papel las pone en contacto con la tierra, que puede estar contaminada con metales pesados, plaguicidas y otras sustancias tóxicas. Las mujeres también tienen, como media, un mayor porcentaje de grasa corporal, y es a través de ella por donde se absorben algunas sustancias tóxicas en el cuerpo humano. Ello agrava los riesgos de contaminación y de problemas de salud serios<sup>102</sup>. Esos efectos desproporcionados pueden arrastrar a las mujeres indígenas a ciclos de pobreza y a la exposición a violencia de género<sup>103</sup>.

86. Además, los estudios y experiencias de los pueblos indígenas muestran continuamente los efectos perjudiciales de las sustancias tóxicas en los embarazos y los nacimientos. La contaminación lleva al aumento de los mortinatos, los abortos, los niños con peso bajo al nacer y la transmisión de la toxicidad a través del torrente sanguíneo. Las mujeres de la tribu shoalwater en el estado de Washington (Estados Unidos) comenzaron a experimentar abortos como consecuencia de perturbadores endocrinos hallados en los plaguicidas y herbicidas con que se fumigaban las plantaciones de arándanos rojos cercanas<sup>104</sup>. En la Amazonia, ha habido casos en que las mujeres indígenas fueron culpadas de malformaciones de sus bebés y expulsadas de sus comunidades<sup>105</sup>.

## D. Los niños indígenas

87. Los niños indígenas, al igual que otros niños, son más sensibles a las sustancias tóxicas debido a que su cuerpo todavía está creciendo y desarrollándose, incluidos su sistema endocrino e inmunológico<sup>106</sup>. El aumento de las discapacidades puede dificultar el aprendizaje de las lenguas y las tradiciones culturales o crear problemas de movilidad y de salud que reducen la participación en las rutinas diarias. La disminución del número de nacimientos de niños indígenas supone, nada menos, que un riesgo para la supervivencia de los pueblos indígenas.

## E. Las personas de edad indígenas

88. Las personas de edad son particularmente vulnerables a los problemas de salud y a experimentar un sufrimiento psíquico extremo como consecuencia del desplazamiento causado por la contaminación de la tierra. Las dificultades para transmitir los conocimientos y la concepción que hay en el corazón de las culturas indígenas, sus tradiciones y sus lenguas pueden agravar aún más los sentimientos de desesperación y pérdida de la identidad. Un medio ambiente saludable es vital para la realización de los derechos de las personas de edad.

<sup>102</sup> Andrea Carmen y Viola Waghiyi, “Indigenous women and environmental violence”, documento presentado a la reunión del grupo de expertos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre el tema “Combatar la violencia contra las mujeres indígenas”, 2012.

<sup>103</sup> Véase [A/HRC/50/26](#).

<sup>104</sup> Nancy Langston, “Toxic inequities: chemical exposures and indigenous communities in Canada and the United States”, *Natural Resources Journal*, vol. 50, núm. 2 (2010).

<sup>105</sup> Información procedente de las consultas con FENAMAD llevadas a cabo el 3 de junio de 2022.

<sup>106</sup> PNUMA, “Young and old, air pollution affects the most vulnerable”, 16 de octubre de 2018.

## V. Instrumentos internacionales pertinentes para las sustancias tóxicas y los derechos de los pueblos indígenas

89. El marco normativo internacional relativo a las sustancias químicas y los desechos todavía no engloba ni articula de manera explícita un enfoque integrado y holístico basado en los derechos humanos. Esta carencia limita el goce por los pueblos indígenas de sus derechos humanos y exacerba las brechas en la protección de la salud humana y el medio ambiente que han resultado del desarrollo fragmentado y *ad hoc* de este marco a lo largo de los últimos 40 años.

90. Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible piden una mayor protección de la alimentación, el agua y la salud, todas las cuales se ven amenazadas por la violencia tóxica contra los pueblos indígenas.

91. La reunión internacional titulada “Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos: nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad” se centró en las formas de acelerar los avances para lograr un planeta sano. En la reunión, los Estados Miembros y las partes interesadas recomendaron el fortalecimiento de la aplicación nacional de los acuerdos basándose en las “perspectivas y el saber hacer procedentes de los conocimientos indígenas y tradicionales” y pidieron una mayor cooperación y solidaridad, también mediante la participación de los pueblos indígenas en la formulación y la aplicación de políticas<sup>107</sup>. Los conocimientos y los valores indígenas pueden contribuir a revertir la degradación ambiental y a cambiar el rumbo de las cosas hacia la sostenibilidad<sup>108</sup>.

### A. Acuerdos multilaterales sobre sustancias químicas y desechos

92. Si bien los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con las sustancias químicas y los desechos comparten un objetivo común de proteger el medio ambiente y la salud humana, todavía no han incorporado un enfoque integrado basado en los derechos humanos. Ello puede resultar en la exclusión de los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones sobre las sustancias químicas y los desechos. Los pueblos indígenas tampoco tienen pleno acceso a los mecanismos de rendición de cuentas, como los comités de cumplimiento para expresar sus reclamaciones y buscar la aplicación de esos acuerdos, frente a la Convención de Aarhus, el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos.

93. Los instrumentos relativos a las sustancias químicas y los desechos han empezado a trabajar sobre los grupos vulnerables, pero esta labor todavía no se centra en los pueblos indígenas<sup>109</sup>. No obstante, algunos Estados limitan la definición de “indígenas”<sup>110</sup>, o agrupan a los pueblos indígenas con las “comunidades locales”, a fin de limitar la tierra y otros derechos de los pueblos indígenas<sup>111</sup>. Además, los

<sup>107</sup> Observaciones finales de los Presidentes ante el pleno.

<sup>108</sup> Véase [www.unep.org/news-and-stories/story/indigenous-peoples-and-nature-they-protect](http://www.unep.org/news-and-stories/story/indigenous-peoples-and-nature-they-protect).

<sup>109</sup> Convenio de Estocolmo, art. 7; la dimensión de género en los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, véase [www.brsmeas.org/Implementation/Gender/GenderHeroes/Introduction/tabid/4759/language/en-US/Default.aspx](http://www.brsmeas.org/Implementation/Gender/GenderHeroes/Introduction/tabid/4759/language/en-US/Default.aspx).

<sup>110</sup> Aportación de Center for Citizen’s Communication and Justice; véase <https://ipen.org/sites/default/files/documents/mercury-cop4.2-report-back-v2a-en.pdf>.

<sup>111</sup> Aportación de la Organización Nacional Indígena de Colombia; véase la recomendación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre los derechos emergentes de las comunidades locales, que puede consultarse en [www.cbd.int/doc/c/4386/ac7b/fe383a6c1a542cafe05da837/wg8j-11-06-en.pdf](http://www.cbd.int/doc/c/4386/ac7b/fe383a6c1a542cafe05da837/wg8j-11-06-en.pdf).

Estados carecen de directrices específicas sobre la aplicación de esos acuerdos cuando estos afectan a los pueblos indígenas y sus tierras.

94. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas podría contribuir a hacer frente a estas carencias iluminando la interpretación de las convenciones relativas a las sustancias químicas y los desechos.

## 1. Convenio de Minamata sobre el Mercurio

95. El Convenio de Minamata sobre el Mercurio regula las actividades en las que se libera mercurio, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. En el preámbulo del Convenio de Minamata, las partes en el Convenio toman nota de “la vulnerabilidad especial de los ecosistemas árticos y las comunidades indígenas debido a la biomagnificación del mercurio y a la contaminación de sus alimentos tradicionales, [...] preocupadas en general por las comunidades indígenas debido a los efectos del mercurio”.

96. El Convenio de Minamata se ve obstaculizado por deficiencias críticas en lo que respecta a la extracción de oro en pequeña escala, que es, con mucho, la mayor fuente de emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente, que además van en aumento<sup>112</sup>. Una carencia importante es que el Convenio permite el uso de mercurio en la extracción de oro en pequeña escala<sup>113</sup>, y otras, que el Convenio permite que la extracción primaria de mercurio continúe hasta 15 años después de su entrada en vigor en 2017, y que el Convenio no prohíbe el comercio internacional de mercurio para la extracción de oro en pequeña escala.

97. Estas deficiencias no solo socavan los objetivos y la eficacia de la Convención, sino que también causan y agravan la exposición al mercurio entre las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas. Muchos pueblos indígenas sufren la contaminación de los peces de los ríos y los océanos, que anteriormente habían sido la base de su estilo de vida y su cultura de subsistencia habituales.

98. En su última reunión, la Conferencia de las Partes del Convenio hizo algunos progresos, y pidió a los Estados que involucraran a los pueblos indígenas cuando desarrollaran planes de acción nacionales para reducir y eliminar el mercurio en la extracción de oro en pequeña escala<sup>114</sup>. Como siguiente paso, la Conferencia de las Partes debería establecer un proceso para garantizar la participación de los pueblos indígenas.

## 2. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes

99. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes tiene como objetivo eliminar o reducir la producción y el uso de esos contaminantes. En el Convenio, se reconoce que “los ecosistemas y comunidades indígenas árticos están especialmente amenazados debido a la biomagnificación de los contaminantes orgánicos persistentes y que la contaminación de sus alimentos tradicionales es un problema de salud pública”<sup>115</sup>. Sin embargo, hasta la fecha, ni las disposiciones del Convenio ni las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes ofrecen orientaciones concretas ni establecen programas específicos para prevenir los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes en los pueblos indígenas.

<sup>112</sup> Véase [A/HRC/51/35](#).

<sup>113</sup> Arts. 2 k) y 7.

<sup>114</sup> Véase la decisión MC-4/4.

<sup>115</sup> Convenio de Estocolmo, preámbulo.

### 3. **Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional**

100. El Convenio de Rotterdam tiene por objeto controlar el comercio internacional de productos químicos y plaguicidas peligrosos mediante un procedimiento de consentimiento fundamentado. El procedimiento de consentimiento fundamentado previo es necesario para todos los productos químicos incluidos en el anexo III del Convenio. Una vez que un producto químico está en la lista del anexo III, el artículo 10 otorga a las partes importadoras la autoridad para decidir si importan ese producto químico. El Convenio de Rotterdam no establece una prohibición de la importación y la exportación de los productos químicos incluidos en la lista, sino que más bien constituye una plataforma para intercambiar información sobre ellos.

101. El procedimiento de consentimiento fundamentado previo del Convenio de Rotterdam no contempla específicamente el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para la importación de sustancias tóxicas a sus territorios. Ni siquiera contempla la participación de los pueblos indígenas en el proceso. El procedimiento de consentimiento fundamentado previo del Convenio también permite a las partes exportar plaguicidas peligrosos y otros productos químicos cuyo uso está prohibido en su propio territorio, siempre que se cuente con el consentimiento del país importador, con independencia de las repercusiones en los pueblos indígenas.

102. La Conferencia de las Partes del Convenio tampoco ha actuado sobre las recomendaciones de su Comité de Examen de Productos Químicos para prevenir los daños a la salud humana y al medio ambiente, como se destaca en el informe del Relator Especial sobre el derecho a la ciencia en el contexto de las sustancias tóxicas<sup>116</sup>.

### 4. **Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación**

103. En virtud de las disposiciones del Convenio de Basilea, los pueblos indígenas no reciben una protección explícita y específica contra los efectos de los movimientos transfronterizos y la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos. Indonesia y Suiza lideraron una iniciativa para mejorar la eficacia del Convenio que dio como fruto, entre otras cosas, un conjunto de manuales prácticos adoptados en la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes<sup>117</sup>. Una de sus recomendaciones en relación con las normas de desempeño ambiental especifica que “las instalaciones y los servicios [de control de desechos de los Estados] también deben tomar en consideración otras políticas aplicables, como el derecho consuetudinario [o indígena] y los tratados”<sup>118</sup>.

## B. **Instrumentos internacionales de derechos humanos**

104. Los derechos humanos indígenas están interrelacionados, son interdependientes, están interconectados y son indivisibles. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen el deber de proteger a los pueblos indígenas de la exposición a las sustancias tóxicas. En los casos de daños ambientales, el Estado debe vigilar y restaurar la calidad ambiental de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y garantizar la remediación ambiental. Los Estados deben adoptar medidas de precaución para garantizar un medio ambiente saludable y limpio en el que las

<sup>116</sup> [A/HRC/48/61](#).

<sup>117</sup> Véase la decisión BC-13/2.

<sup>118</sup> Véase [UNEP/CHW.13/4/Add.1/Rev.1](#).

plantas medicinales, los animales y las tierras estén libres de contaminación. Para proteger los derechos de los pueblos indígenas, los Estados deben integrar estas obligaciones y principios en la aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales relativos a las sustancias químicas y los desechos.

## **1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas**

105. El goce efectivo de los derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se basa en el respeto del derecho a vivir en un entorno no tóxico. Por ejemplo, en el artículo 24 se declara que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. En el artículo 20 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

106. La Declaración establece protecciones para los pueblos indígenas frente a las sustancias tóxicas. En el artículo 29 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la conservación y la protección de su medio ambiente. También se dispone que los Estados adoptarán medidas para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, y para vigilar y apoyar la salud de los pueblos indígenas si estos se ven expuestos a esos materiales.

107. Dado que la denegación de los derechos sobre la tierra, el menoscabo de los territorios y la extracción de recursos son factores clave que provocan daños a los pueblos indígenas, la Declaración establece varias protecciones para hacer frente a esas amenazas. En el artículo 3 se afirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en virtud del cual los pueblos indígenas persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En el artículo 19 se articula la obligación de los Estados de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento.

## **2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial**

108. Los patrones desproporcionados de exposición a sustancias tóxicas en los pueblos indígenas reflejan la discriminación y la violencia estructurales contra los pueblos indígenas. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial establece que los pueblos indígenas deben ser tratados de forma equitativa para que puedan acceder a todos sus derechos humanos. En el preámbulo se considera la condena que han hecho las Naciones Unidas del colonialismo, la segregación y la discriminación, y se afirma el objetivo de prevenir futuras manifestaciones de esa violencia.

109. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su recomendación general núm. 23 (1997), afirma que los Estados deben proporcionar a los pueblos indígenas las condiciones que les permitan un desarrollo económico y social sostenible, compatible con sus características culturales, y garantizar que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública. Además, no debe adoptarse decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento libre, previo e informado.



110. En los artículos 2 1) d) y 5 e) de la Convención se dispone que los Estados partes adoptarán las medidas legislativas y administrativas apropiadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la cultura y al desarrollo social y económico. En su recomendación general núm. 23 (1997), el Comité reconoce la necesidad de evitar la pérdida de “sus tierras y sus recursos” a manos de “los colonizadores, las empresas comerciales y las empresas de Estado”.

### 3. Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)

111. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) crea normas para los Estados relativas a los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras, territorios y recursos. En el preámbulo se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de su desarrollo y sus formas de vida a fin de mantener su identidad cultural y espiritual.

112. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas puede iluminar elementos clave del Convenio núm. 169 de la OIT. El deber de consultar de buena fe con el fin de llegar a un acuerdo, establecido en el artículo 6, debe interpretarse a la luz de las normas del consentimiento libre, previo e informado de la Declaración relativas a la explotación y el uso de las tierras indígenas<sup>119</sup>. Del mismo modo, el deber de los Gobiernos de “tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”, dispuesto en el artículo 7, debe incluir medidas para garantizar que no se almacenen ni eliminen sustancias peligrosas sin su consentimiento libre, previo e informado.

113. En junio de 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo modificó los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo para incluir el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental<sup>120</sup>. Se trata de una modificación decisiva, con importancia jurídica y política, y plenamente coherente con las protecciones especiales previstas en el Convenio núm. 169 de la OIT para los derechos de los trabajadores indígenas. En el artículo 20 se dispone que los trabajadores no estarán sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, “en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas”. Además, en el artículo 25 se dispone que los Gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos indígenas interesados servicios de salud adecuados, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

### 4. Convención sobre los Derechos del Niño

114. La Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de los niños indígenas a disfrutar de su cultura. Una parte integral del derecho de los niños indígenas a la cultura es el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En particular, los Estados deben prevenir la exposición de los niños a las sustancias tóxicas, también por medio del agua, los alimentos, el aire y otras fuentes de exposición<sup>121</sup>.

115. El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación general núm. 11 (2009), relativa a los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, señala que,

<sup>119</sup> El derecho a ser consultados y al consentimiento en los arts. 6 1) y 6 2), 15 2), 17 2), 22 3), 27 3) y 28 1).

<sup>120</sup> OIT, “La Conferencia Internacional del Trabajo añade la seguridad y la salud a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”, 10 de junio de 2022.

<sup>121</sup> Convención sobre los Derechos del Niño, art. 24.

para los niños indígenas, la utilización de las tierras tradicionales reviste considerable importancia para su desarrollo y para el disfrute de su cultura. El Comité exhorta a los Estados a que estudien “con detenimiento la importancia cultural de las tierras tradicionales y de la calidad del medio ambiente natural al proteger, en toda la medida de lo posible, el derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha instado a que los Estados apliquen plenamente la Convención, haciendo hincapié en la necesidad de velar por que los niños indígenas no estén expuestos a sustancias tóxicas a través del agua, los alimentos, el aire y otras fuentes de exposición<sup>122</sup>.

## VI. Conclusiones y recomendaciones

**116. Los pueblos indígenas están sufriendo graves efectos en sus derechos humanos fundamentales debido a la exposición a sustancias tóxicas y peligrosas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las voces de los pueblos indígenas son silenciadas en los procesos de toma de decisiones sobre las sustancias químicas y los desechos.**

**117. La extracción irresponsable de minerales, petróleo y gas niega a los pueblos indígenas el goce de sus derechos fundamentales. Las labores de exploración aumentan la deforestación y afectan a la biodiversidad, y las pruebas sísmicas que se utilizan en la exploración perturban las fuentes vitales de alimentos. La enorme contaminación tóxica, y en ocasiones radiactiva, causada por la explotación extiende la muerte y la enfermedad a la vegetación, los animales, el agua y el cuerpo de los pueblos indígenas. Toda esta devastación desplaza a los pueblos indígenas y los aparta de aspectos vitales de su cultura, su idioma y sus medios de subsistencia.**

**118. Son demasiados los casos en que los Estados hacen caso omiso de la salud y el bienestar de los pueblos indígenas al autorizar actividades que liberan sustancias peligrosas en sus territorios. Las empresas exportan plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en sus países de origen, y esas sustancias químicas tóxicas se pulverizan sobre los pueblos indígenas. El vertimiento de desechos peligrosos, en particular en zonas militares, deja cicatrices intergeneracionales en los pueblos indígenas. Decenios de eliminación de desechos en tierras indígenas o cerca de ellas han afectado a los cauces de agua interconectados y a las fuentes de alimentos.**

**119. Estas actividades e industrias afectan a todos los aspectos de la vida indígena, pues repercuten en el disfrute de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La negación del consentimiento libre, previo e informado abre las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas a actividades que causan la pérdida de alimentos, el agua, la vida y de un entorno limpio y saludable. Las emisiones de sustancias peligrosas tienen numerosas y devastadoras consecuencias para la salud humana y la biodiversidad, pues esas sustancias recorren grandes distancias llevadas por el viento y el agua, se acumulan en los organismos vivos, o persisten en el medio ambiente. La falta de acceso a la información limita la capacidad de los pueblos indígenas para comprender los procesos de toma de decisiones relacionados con actividades que pueden tener efectos tóxicos nocivos y participar en ellos.**

**120. Los pueblos indígenas en situaciones vulnerables, como aquellos que viven en aislamiento, y las mujeres, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, sufren efectos y dificultades adicionales. La exposición a**

<sup>122</sup> E/2018/43, párr. 43.

sustancias tóxicas provoca diversas formas de discapacidad y también intensifica las difíciles condiciones en que viven las personas indígenas con discapacidad. Los roles socioculturales en las sociedades indígenas pueden agravar la violencia ambiental contra las mujeres. Las graves consecuencias que la sustancias tóxicas y peligrosas tienen en los niños y en las personas de edad dificultan la transmisión y el cultivo de los conocimientos tradicionales.

121. Por otra parte, es notoria la incapacidad de los instrumentos internacionales que regulan las sustancias químicas y los desechos para proteger los derechos reconocidos internacionalmente de los pueblos indígenas. Además, los Estados no aplican de manera efectiva sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de prevenir los efectos de la exposición a sustancias tóxicas sobre los pueblos indígenas, protegerlos de ellos y ponerles remedio.

122. Hacer frente a la violencia tóxica que sufren los pueblos indígenas es imprescindible para su supervivencia, su libre determinación y su autonomía cultural. La realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas exige el respeto, la protección y la realización de su derecho a un entorno saludable, incluido su derecho a no estar expuestos a sustancias tóxicas y peligrosas.

123. El Relator Especial recomienda que los Estados:

a) Señalen la amenaza que suponen las actividades y las industrias que tienen efectos tóxicos para los pueblos indígenas, entre otros, mediante el transporte atmosférico o por las corrientes marinas de sustancias tóxicas, y adopten de inmediato medidas urgentes para poner fin a la llegada de sustancias tóxicas y peligrosas a los territorios indígenas;

b) Elaboren y apliquen programas para vigilar las actividades que vierten sustancias tóxicas y desechos en los territorios indígenas y para limpiar los desechos y rehabilitar los ecosistemas contaminados;

c) Respeten el derecho al consentimiento libre, previo e informado y lo obtengan, en particular para las actividades que puedan tener efectos tóxicos en los pueblos indígenas;

d) Trabajen con los pueblos indígenas para crear mecanismos para proporcionarles reparación integral por los efectos de las sustancias tóxicas, incluida la rehabilitación plena e integral de sus tierras, territorios y recursos;

e) Creen un entorno propicio para la investigación científica sobre los riesgos y perjuicios de las sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud de los pueblos indígenas;

f) Adopten una estrategia nacional para eliminar el mercurio en las explotaciones de oro en pequeña escala, basándose en principios de derechos humanos y en consultas con los pueblos indígenas;

g) Prohíban la producción y la exportación de sustancias químicas cuyo uso está prohibido dentro del Estado;

h) Prohíban la fumigación aérea con plaguicidas que sean nocivos para los pueblos indígenas y apliquen esa prohibición de manera efectiva;

i) Exijan a las empresas que informen plenamente a los pueblos indígenas afectados sobre sus actividades en las tierras indígenas, también sobre su impacto ambiental;

j) Desarrollen y apliquen iniciativas en las instituciones del Estado y legislación para hacer frente al efecto desproporcionado que tienen las sustancias

tóxicas en los pueblos indígenas, en especial en las personas en situaciones vulnerables;

k) Creen planes de atención de la salud para abordar las disparidades en materia de salud que afectan a los pueblos indígenas, incluidas directrices sobre cómo hacer frente a los efectos concretos sobre la salud, el medio ambiente y la cultura que las sustancias tóxicas tienen para los pueblos indígenas;

l) Proporcionen recursos para apoyar iniciativas lideradas por los pueblos indígenas para hallar soluciones a la exposición a sustancias tóxicas que sean específicas desde el punto de vista cultural y ecosistémico y estén basadas en los derechos;

m) Respeten y apliquen los tratados y otros acuerdos celebrados entre los Estados y los pueblos indígenas;

n) Ratifiquen y apliquen de manera efectiva los Convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata con un enfoque basado en los derechos humanos, en particular integrando el consentimiento libre, previo e informado y los derechos a la participación, la información, el acceso a la justicia y a un recurso efectivo;

o) Se adhieran al Acuerdo de Escazú y a la Convención de Aarhus y los apliquen de manera efectiva;

p) Protejan el desarrollo cultural y espiritual de los pueblos indígenas, entre otros medios, evitando su exposición a sustancias tóxicas y velando por la remediación en casos de contaminación.

124. El Relator Especial recomienda que las empresas:

a) Obtengan el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuyos derechos, tierras y medios de subsistencia se verían afectados por sus actividades en todas las etapas de un proyecto, desde la planificación hasta la aplicación, pasando por la supervisión y, en caso necesario, la restauración y limpieza;

b) Realicen investigaciones sobre los efectos de sus actividades en los pueblos indígenas y hagan públicos todos los métodos y datos utilizados, los protocolos seguidos y las conclusiones;

c) Proporcionen toda la información de manera accesible desde el punto de vista cultural y se embarquen en un diálogo culturalmente apropiado con los pueblos indígenas sobre las actividades y sus repercusiones y efectos en sus tierras, sus aguas, sus alimentos y sus ecosistemas en todas las fases de esas actividades.

125. El Relator Especial recomienda que los organismos y mecanismos internacionales en el ámbito de la gestión de las sustancias químicas y los desechos:

a) Integren un enfoque basado en los derechos humanos en todos los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas y los desechos, haciendo especial hincapié en los riesgos y daños a los pueblos indígenas, entre otros medios:

i) Creando procesos para la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y para su consentimiento libre, previo e informado en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas y los desechos;

**ii) Poniendo en marcha programas de concienciación y difusión de información a los pueblos indígenas sobre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas y los desechos;**

**iii) Reduciendo las barreras lingüísticas y al acceso que dificultan la participación de los pueblos indígenas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas y los desechos;**

**b) Aprueben planes de trabajo y programas específicos sobre políticas, medidas y desarrollo de la capacidad pertinentes para los pueblos indígenas en el marco de cada uno de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente relacionados con las sustancias químicas y los desechos, incluido el respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el consentimiento libre, previo e informado y la participación de los pueblos indígenas.**

---